

OBSERVA INFORME GENERAL

Señor Juez:

COMMODITIES S.A., representada en este acto por Mariano Grassi en carácter de apoderado, conforme documentación glosada en autos con escrito cargo N° 599/2020, con patrocinio letrado, dentro de estos autos caratulados “**VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO**”, CUIJ 21-25023953-7, de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, ante V.S. me presento y respetuosamente expreso:

I.- OBSERVA INFORME GENERAL

Que vengo por el presente, en tiempo y forma, a formular observaciones al informe general de la Sindicatura.

1.1. Observación al capítulo 8 punto b (actos susceptibles de ser declarados ineficaces).

En este punto la sindicatura hace referencia a una serie de actos que podrían ser considerados ineficaces u oponibles en caso de quiebra sustentando su exposición en “...*la labor de la Sindicatura se basa en sus facultades deberes de investigación, su propia interpretación y el análisis y recolección de información relevante de diversas fuentes; entre otras la vertida en el expediente (principal y sus incidentes) tales como los pedidos de verificación de créditos, los informes de la Auditoría Forense, Interventores y Veeduría, presentaciones de acreedores concurrentes (como el BNA, AFIP entre otros)*...” pareciera ser que selecciona minuciosamente los actos sobre los que cabría tal posibilidad.

Se observa que la Sindicatura refiere a algunos actos que serían ineficaces conforme el art. 118 de la LCQ y otros que serían inoponibles en los términos del art. 119 LCQ.

Sobre los primeros, se limita a indicar tan solo 5 actos realizados a título gratuito, de los cuales 3 han sido indicados expresamente por “...*la auditoría forense, veedores, acreedores particulares que promovieron querellas penales*...” pero bajo ningún punto de vista demuestra tener cabal conocimiento de actos notoriamente perjudiciales para la concursada –y por ende, para acreedores- que sean fruto de su propio labor.

Sobre los segundos, (encuadrables en el art. 119 LCQ), hace referencia a tan sólo 2 actos (transferencia de participación societaria de RENOVA SA y TASTIL SA)

Y a esta altura, con una administración sospechada de comisión de delitos penales e innumerable cantidad de actos indicados por los diferentes actores que participan del proceso, el análisis es cuanto menos insuficiente teniendo en cuenta todos los elementos con los que dispone (tanto en lo relacionado al acceso irrestricto de información de la concursada, tanto en lo relacionado a las constancias obrantes en autos, incidentes y demás expedientes de los que participa la agroexportadora).

El informe ni siquiera intenta adentrarse en las causas por las cuales gran parte de las empresas del grupo le adeudan dinero a la concursada (tal cual ha sido indicado por Vincentin al momento de su presentación concursal) para evaluar si realmente podrían estar enmarcadas en estos supuestos.

Sin ir más lejos, al momento de la presentación concursal existían cuentas corrientes por cobrar por más de 4 mil millones de pesos por parte de, entre otras, Buyanor S.A., Algodonera Avellaneda S.A., Vicentín Europa S.L., Oleaginos San Lorenzo S.A., Emulgrain S.A., Vicentin Paraguay SA, ENAV SA, Tastil SA, Sir Cotton SA, Friar SA, Terminal Puerto Rosario SA.

Tampoco analiza si los créditos y/o deudas que los accionistas y directores detentan para con la concursada son reales, causados, gratuitos o no, y bajo qué circunstancias fueron generados, como para representar la posibilidad de que sean incorporados en este listado de actos posiblemente revocables.

Por otro lado, tampoco indica, como para desechar cualquier posibilidad de revocación, como Vicentin Family Group SA se ha nutrido de los activos necesarios para hacerse de la participación societaria de casi todas las empresas de las que era titular la concursada, cuando los propios veedores, la auditoría forense y acreedores, vienen señalando constantemente que todo indica que ha sido Vicentin quien ha nutrido por diferentes medios, principalmente gratuitos, a Vincentin Family Group de los recursos necesarios para obtener semejantes bienes a su nombre.

Recordemos que Vicentín Family Group SA por medio de VFG Inversiones y Actividades Especiales SA e Industria Agroalimentaria Latam SA, todas compañías Uruguayas y de las cuales tiene el 100% del capital, controla indirectamente las siguientes sociedades:

1. Algodonera Avellaneda SA – 97%
2. Sudeste Textiles – 100%
3. Sir Cotton SA
4. Friar SA – 50%
5. South American Food Company SA – 100%
6. Alimentos refrigerados SA - 90%
7. Cotonficio de Andira SA 50%
8. Sottano SA – 95%
9. Patagonia Bio Energia SA – 100%
10. Enav 50%
11. Renopack 50% (50% restante Vicentin SAIC)
12. Vicentin Chile Spa

También la sindicatura ha omitido incluir en la enumeración a todos aquellos pagos realizados por la concursada con posterioridad a la exteriorización de la cesación de pagos ocurrida el día 04.12.2019, es decir, desde el 05.12.2019 atento de ser ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos en la que se encontraba.

Es que el hecho de haber realizado pagos a acreedores ya encontrándose en tránsito del estado falencial, es reprochable desde dos ópticas: por un lado, se ha violado la paridad de los acreedores, al preferir arbitrariamente a unos sobre otros pagándoles sus créditos cuando el stress financiero era ya de público y notorio. Por el otro, en el caso de decretarse la quiebra de Vicentin SAIC, los pagos objetados habrían contribuido a la disminución del patrimonio de la fallida y, consecuentemente, la merma del dividendo falencial de los acreedores.

En doctrina se tiene dicho al respecto:

“Es principio recibido que el pago de créditos líquidos y exigibles, con medios normales, debe ser considerado, a los fines de la acción de ineficacia concursal, como un acto revocable, si el tercero que lo recibió conocía de la insolvencia del solvens después fallido”. (HEREDIA, Pablo. Tratado Exegético de derecho concusal. Ed. Ábaco. tomo 4, Pág. 327).

“El pago es un acto autónomamente revocable, es decir, su ineficacia opera independientemente de que sea revocable o no el negocio en cumplimiento del cual se efectuó”. (Gallesio-Piuma, M.E., L'azione revocatoria fallimentare, Cedam, Padova, 1995)

De tal forma, la sindicatura se encuentra obligada para cumplir con este recaudo legal en debida forma a investigar, analizar y pronunciarse sobre todos los actos indicados en el presente apartado debiendo dilucidar, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada uno de ellos, si podrían ser tildados de revocables en los términos de los arts. 118 y 119 LCQ.

1.2. Observación al capítulo 1 (Causa de la cesación de pagos).

La Sindicatura realizó un extenso análisis doctrinario y jurisprudencial del concepto del informe general y sus funciones, mas luego omitió ahondar verdaderamente en las reales causas del escandaloso *default* de sus obligaciones.

Meramente se limitó a transcribir las explicaciones dadas por la propia concursada y luego, al identificar las que según su criterio técnico habrían sido las causales de la cesación de pagos, las reprodujo nuevamente soslayando información de suma relevancia que consta en los autos concursales, como por ejemplo los exhaustivos informes que ha venido confeccionando la auditoría forense nombrada por V.S.

En una actitud complaciente con la concursada, que se ha advertido desde el comienzo del proceso, la Sindicatura ha incumplido con su labor de ahondar en las verdaderas causas, no solo de la cesación de pagos, sino también de su magnitud.

Puntualmente cabe enfatizar en la (falta de) registración de los pasivos comerciales por parte de Vicentin SAIC que, como se ha afirmado en múltiples presentaciones, le permitió acceder a un financiamiento ilimitado, exhibiendo sanos estados contables ante las entidades crediticias y proveedores comerciales, cuyo efecto fue un suculento engrosamiento de su deuda y el estiramiento de la agonía hasta diciembre de 2019.

Lo que sucedía hasta el *default* es que Vicentin no registraba como pasivo el precio por las compras de granos en condición “a fijar”, exhibiendo en sus balances todo lo bueno de su actividad, es decir, el crédito por la venta de las mismas, pero no lo negativo, el precio adeudado.

Véase que la auditoría forense en su tercer informe indicó sobre la forma en que la concursada registraba dichas operaciones:

*“Si por razones operativas fuese más práctico registrar las operaciones en el momento de la fijación del precio, **podría hacerse siempre y cuando, al cierre de un ejercicio mensual, trimestral o anual, se contabilizara el stock en el activo y el consabido pasivo de las operaciones pendientes,** o el impacto, si se hubiere vendido la mercadería, en el costo de producto vendido”*

Luego de ello, a partir de un análisis efectuado en base a información aportada por los mayores proveedores de Vicentin, concluyó:

*“Semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compra-venta de granos con precio a fijar **no se encontraban expuestas en el Pasivo en los años anteriores**”.*

Ahora bien, lo que llama poderosamente la atención es cómo la Sindicatura siquiera ha hecho mención a ello pues, si bien no explica la causa de la cesación de pagos, resulta de suma relevancia para comprender el derrotero de Vicentin hasta su estado actual y, fundamentalmente, explica por qué pudo construir semejante endeudamiento con las entidades financieras y los proveedores granarios.

Por el contrario, se limita a enumerar factores ajenos a la gestión de la empresa sin ahondar en muchos casos en la manera en que habrían impactado en la insolvencia, pretendiendo exhibir a los accionistas y directores como meras víctimas de una coyuntura desfavorable.

Por su parte, vinculado a lo expuesto en el punto precedente, en ningún pasaje la Sindicatura ahonda sobre la relación con las sociedades vinculadas y las inversiones que por vía de ellas se han canalizado. Es que resultan también de suma relevancia al proceso concursal las pésimas decisiones tomadas por la compañía al realizar inversiones de lento retorno,

inmovilizando fondos que, muy factiblemente, habrían permitido paliar la crisis acentuada en las elecciones PASO 2019.

Lo antedicho resulta más grave aún al advertir que Vicentin financiaba las compras y la actividad de múltiples de dichas sociedades mas no contaba con el control y ni siquiera participaciones relevantes en el paquete accionario. Tal como se ha mencionado, son los casos de Terminal Puerto Rosario SA, donde la concursada tiene solo un 10,20 % del capital, adeudándole esta la suma de 171 millones de pesos al cierre del ejercicio 2018, Algodonera Avellandeda SA, con una participación de 2,99 % de Vicentin SAIC y préstamos por 1.730 millones de pesos al cierre del ejercicio 2018 o Friar SA, donde la concursada participa en un 0,39 %, habiéndole prestado dinero por 963 millones de pesos al cierre del ejercicio 2019.

Es evidente que el hundimiento de liquidez en dichas inversiones ha tenido sustancial entidad en la caída de Vicentin SAIC siendo ello de máxima relevancia para la determinación de las reales causas de cesación de pagos.

La Sindicatura, en el capítulo 13 de su informe, nuevamente no realiza un análisis completo y acabado sino que solo intenta profundizar las excusas esgrimidas por la concursada al momento de solicitar la apertura concursal, cayendo luego en exceso de explicaciones doctrinarias sobre la conformación de los grupos societarios y los procesos de desinversión con un único fin: dotar de legalidad el vaciamiento de la concursada.

La única conclusión que puede sacarse del entramado societario es que Vicentin ha usado el buen crédito que por sus falsos balances obtenía para financiar inversiones canalizadas por medio de otras sociedades, en la mayoría de las cuales no tiene el control y, por ende, no conforman la prenda común de los acreedores.

Párrafo aparte merece la cuestión relativa a Renova, donde la concursada viene fasonenado a pérdidas desde hace años, a valores mayores a los de mercado para solventar una frondosa inversión que nunca estuvo en condiciones de afrontar. Cabe cuestionarse mínimamente los resultados que Renova le trajo a Vicentin hasta la fecha y si resulta viable para esta continuar o no con dicha inversión.

NUEVAMENTE, NADA DIJO LA SINDICATURA RESPECTO A LAS MALAS INVERSIONES Y A LA NOTORIA PÉRDIDA QUE LAS MISMAS HAN CAUSADO A VICENTIN, CONFLUYENDO TAMBIÉN A LA CESACIÓN DE PAGOS, teniendo el deber de realizar un estudio más minucioso respecto de las verdaderas causas por las que la concursada cayó en estado falencial.

II.- CONCLUSIONES

De lo expuesto se puede concluir que:

- a) Deben considerarse sujetos a revocación futura en los términos de los artículos 118 y 119 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24522, no sólo los 7 actos mencionados, sino también deben analizarse todos aquellos que se encuentran**

relacionados a sujetos vinculados con Vicentin y sobre los cuales se viene indicando hartamente que han sido concertados con bienes de la concursada sin recibir contraprestación alguna y/o por fuera de valores reales de mercados y/o claramente perjudiciosos para la concursada y/o basados en desvíos injustificados de activos.

b) A las causas de la cesación de pagos livianamente enumeradas por la Sindicatura, caben adicionar las siguientes:

- Sobreendeudamiento.
- Engrosamiento de su pasivo comercial y financiero en base a balances falsos.
- Financiamiento de inversiones y actividad de compañías vinculadas.
- Inversiones no sustentables para la sociedad (Renova).

Se hace expresa reserva de formular observaciones a lo informado por la Sindicatura en relación en los términos del artículo 39 inciso 2 LCQ.

III.- PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. solicito:

a) Tenga presente las observaciones formuladas al informe general de la Sindicatura.

Proveer de conformidad, **SERÁ JUSTICIA.-**



Lic. Mariano Grassi
DNI 27.318.431



GUILLERMO VILLALBA
ABOGADO
Mat. Prov. L. 9348 - P. 101